

## **MEXICO Y EL MUNDO: MODERNIDAD REVOLUCIONARIA Y POSTMODERNIDAD NEOLIBERAL**

David Ibarra  
Agosto de 2001  
Este País No. 125

El espíritu de la Revolución Mexicana mal encapsulado en la frase “sufragio efectivo, no reelección” —como habría de poner de manifiesto la historia—, buscó ante todo construir una República igualitaria, soberana, indivisible a pesar de las vecindades, de las múltiples etnias y de las polarizaciones que la dividían y la dividen. La imagen de la modernidad revolucionaria es la de una sociedad liberada, plena de posibilidades para todos al desterrarse la opresión y la injusticia. Con pasión, se cree en el poder de la libertad, en la capacidad colectiva de crear una mejor sociedad. Tales creencias se apoyaron en los paradigmas universales de la ilustración que hacen de la razón y la ciencia medios seguros de elevar la condición humana; y, en términos prácticos, se sustentan en una soberanía nacional actuante, capaz de decidir sin obstáculos exógenos infranqueables los caminos del país. Es la época cumbre de brillo y poder del Estado-nación, en tanto concepto y realidad universal.

En las seis décadas que siguen al triunfo de la Revolución, la redistribución de tierras y riquezas y luego los muchos años de prosperidad casi ininterrumpida hicieron realidad una parte importante del sueño revolucionario, aunque se hubiesen aplazado otras aspiraciones relevantes. Con los datos disponibles una década después, cabe apuntar algunas cifras ilustrativas: la producción real entre 1930 y 1980 se multiplicó 16 veces; la población se cuadruplicó, pero el ingreso por persona se expandió otras cuatro veces. El número de estudiantes en los diversos niveles educativos subió treinta veces, el analfabetismo se redujo del 62% al 10% y el empleo productivo pasó de 5 a 20 millones

de trabajadores. Sin duda, fue un logro sin precedente en los anales nacionales y que poquísimos países del mundo han superado.

En el dominio de la política se evoluciona hasta integrar un régimen de acentuado centralismo estatal con poderes presidenciales metaconstitucionales proclives al autoritarismo. Si bien se creó una clara división entre las esferas pública y la privada, el papel hegemónico lo retuvo el Estado. Formalmente la República es federal, en los hechos, la situación ha sido hartamente distinta; también en la ley se consagra la separación clásica de poderes que la práctica de años desvirtúa; por último, la pureza del sistema electoral queda en entredicho por años al asumir el presidente saliente la facultad de designar el candidato del partido hegemónico.

De algún modo los poderes presidenciales reales quedaron anclados en el modelo económico que prevaleció en ese medio siglo. Se cuidaba, no por igual, pero en medida equilibrada, a trabajadores y empresarios. A los primeros con instituciones y normas protectoras, así como mediante disposiciones legales y medidas económicas que atendían de algún modo a sus demandas. A los segundos, mediante un complejo sistema proteccionista y de fomento que los guarecía de la competencia externa o les otorgaba incentivos para emprender inversiones con altos grados de seguridad. Por tanto, el Ejecutivo quedaba convertido en árbitro único y equilibrador de las tensiones socioeconómicas que pudiesen dividir a la sociedad. De ahí mucho del poder real de los presidentes mexicanos.

Entonces, el funcionamiento del sistema dependía de la satisfacción de dos condiciones centrales. La interna, suponía la posibilidad de equilibrar indefinidamente tanto la distribución del producto entre grupos sociales —demandas de empresarios y trabajadores, entre otras—, como las cuentas de la balanza de pagos dentro de un patrón de desarrollo sustentado en la sustitución de importaciones. La condición externa era

función de la permanencia de un orden internacional formado por países soberanos en lo económico y de fronteras semicerradas que facilitase a los gobiernos el cuidar y responsabilizarse del bienestar nacional.<sup>1</sup>

La modernidad revolucionaria estuvo, por tanto, marcada por la paradoja de impulsar a la economía en nombre del progreso nacional, al tiempo que se limitaba o distorsionaba el proceso de modernización política. El impulso a la producción material, y al empleo para todos rescataron al país de un atraso evidente dado por las paupérrimas condiciones del bienestar de la población; pero también sirvió de instrumento ideológico de represión de reivindicaciones democráticas. Los sesgos más ostensibles se observan en las peculiaridades del viejo sistema electoral, como en el corporativismo obrero y empresarial o en la oposición binaria entre federalismo y centralismo. Por eso, el oficio de gobernar quedó reservado a una élite casi endogámica después de la mitad del siglo pasado. Con todo, se afianzó un recio nacionalismo cuya fuerza ideológica logró no sólo satanizar, sino también inventar las fuerzas reales o supuestamente opositoras del progreso: conservadores, terratenientes, clero, izquierdistas, extranjeros, estudiantes.

Por supuesto, esas construcciones ideológicas no nacen de la nada, en su origen, guardan correspondencia con problemas reales insertos en la memoria popular. Sin embargo, héroes, traidores, contrincantes, amigos y enemigos no resultan producto exclusivo de la historia, también lo son de las resonancias políticas que los visten y magnifican, singularmente en la institucionalización de una revolución triunfante o

---

<sup>1</sup> Ambas premisas comenzaron a debilitarse desde la década de los setentas. Los intentos del presidente Echeverría de dar preferencia a los grupos menos favorecidos fue calificada de populismo y encaró la oposición ostensible de otros estamentos sociales, principalmente de los empresariales. Del mismo modo, tuvo que renunciarse a la estabilidad cambiaría al hacerse insostenible la brecha externa de pagos. A su vez, la devaluación de 1982 y luego la nacionalización de la banca provocan enormes trastornos que conducen a la ruptura del pacto social anterior. En el frente externo, tienen lugar mudanzas de primera magnitud que constriñen la autonomía económica de los países periféricos y dificultan, en particular, el sostenimiento del patrón sustitutivo de importaciones. La crisis de la deuda latinoamericana de los ochenta —que inaugura México— y la globalización del orden económico mundial ponen de relieve los altísimos costos a pagar por los países que se resistan a abordar la apertura financiera y del intercambio al afianzarse *urbi et orbi* el paradigma neoliberal.

cuando se dan, como ocurre hoy, mudanzas profundas en el patrón de desarrollo y en la bases de la organización social.

Sea como sea, en el medio siglo que separa a los años treinta del final de los setenta, los gobiernos revolucionarios supieron captar y captar bien las preferencias y aspiraciones medulares de la sociedad mexicana. Pero al propio tiempo, cabe reconocer la presencia de rezagos que se acentúan con el tiempo al cobrar primacía —acaso por efecto del progreso mismo— los temas desatendidos: la eficiencia productiva y la competitividad, la observancia irrestricta de los derechos humanos y, sobre todo, la formación de una ciudadanía recia, alimentada en el ejercicio de la democracia real.

A partir de 1980, los factores internos y externos que se han mencionado tornaron irresistible el imperativo del cambio en la sociedad mexicana. Pero a diferencia de experiencias pasadas, se aprende a renunciar al uso de la violencia en la solución de las nuevas tensiones, a pesar de la envergadura de los cambios que se emprenden. Los costos anejos, invariablemente presentes, se expresan en otras vertientes: exclusión, decaimiento de la civilidad, descomposición social.

Al afianzarse las reglas de la globalización, se reducen los grados de libertad con que se solían conducir las políticas gubernamentales. La aceptación de convenios, reglas o protocolos de alcance internacional limita severamente las funciones y responsabilidades de los estados al convenirse acciones de apertura al intercambio y las finanzas, la desregulación o la privatización de empresas públicas. Los gobiernos que antes se limitaban a resolver las tensiones de orden interno, ahora encaran también la ardua tarea de armonizar las demandas de sus ciudadanos con los compromisos exigentes, formales e informales, acordados con la comunidad internacional. El explosivo acrecentamiento de las transacciones transfronterizas, la enorme movilidad de los capitales y el desarmado o la cesión de los instrumentos nacionales de la política

económica, han hecho perder a los gobiernos el control de las economías, esto es, buena parte de su capacidad de integración. En términos de solidaridad social y legitimidad política.<sup>2</sup>

Aun así, en el ámbito ideológico-económico la magia de los mercados libres e integrados se proclama como la nueva fórmula de acceso a la prosperidad sostenida y remedio a casi todos los males, incluidos los del burocratismo y el rentismo. El nuevo evangelio cae en terreno abonado al quedar seriamente entorpecidas las modalidades anteriores de conducción económica por los abultados desajustes de la balanza de pagos, los de carácter fiscal y los intensos procesos inflacionarios que abruma a los gobiernos mexicanos desde la década de los setenta.

Los hechos aludidos modifican de raíz el modo ciudadano de concebir al país y de entender su historia. Antes el Estado tenía papel protagónico en impulsar el desarrollo y reponsabilizarse del equilibrio social; ahora esa función se trasvasa por la vía del mercado al empresariado que todavía no cuenta con una élite sensibilizada en los grandes problemas nacionales. Antes se protegía sistemáticamente a empresarios y trabajadores mexicanos; ahora se les somete a un régimen abierto y frecuentemente desigual de competencia con el exterior. Antes el capital extranjero quedaba sujeto a numerosas restricciones; ahora se le recibe con los brazos abiertos, como lo demuestra el avanzado proceso de extranjerización de negocios estratégicos. Antes el ariete innovador de la producción residía principalmente en la banca de desarrollo y las empresas públicas; ahora esas tareas corresponden principalmente a los inversionistas privados ya que la banca comercial sigue retraída.

---

<sup>2</sup> Por supuesto, esos no son todos los problemas de la crisis del Estado-nación. Países y gobiernos individuales no disponen de los recursos o la voluntad para atender muchos riesgos globales (ecológicos, desigualdades económicas o los relacionados con el narcotráfico y la criminalidad). Otro de los peligros de la desnacionalización-extranjerización de las economías y de las instituciones jurídicas es la carrera competitiva por el desmantelamiento de las redes de seguridad social y la multiplicación de los excluidos de los mercados formales de trabajo, fuentes de descomposición social y del uso de medios represivos de contención de desórdenes.

Así pues, rupturas y fuerzas contrapuestas de orden interno e internacional, llevan a México y a los mexicanos a transitar del proteccionismo a ultranza a ser campeones periféricos del libre cambio; del nacionalismo cerrado y defensivo al cosmopolitismo abierto y al impulso universal de los derechos humanos; del ciudadano como ser interesado y responsable de los asuntos públicos al consumidor sólo interesado en su satisfacción personal; del Estado garante de la equidad y solidaridad sociales a un liberalismo económico eficientador. Al tiempo que desaparece o se empobrece lo social y lo nacional, se reescribe la historia, aunque ello lleve a permutar héroes por villanos, amigos por enemigos, contrincantes por aliados. Es decir, recomienza el movimiento pendular de las narraciones ideológicas que acompaña y justifica las mudanzas verdaderamente hondas de las instituciones sociales. Esos hechos acompañan al ocaso de la modernidad revolucionaria y al nacimiento de la postmodernidad neoliberal.

En consecuencia, hay desconcierto natural en el gobierno y la sociedad civil, en los cuerpos legislativos y las organizaciones obreras o empresariales y en los propios partidos políticos sobre las reglas de juego, sobre los derechos reales del ciudadano, del hombre económico, o de los cuerpos de intermediación política. Por eso no se acierta a definir los términos de una reforma equilibrada del Estado, ni en los medios de integrar los consensos que reconstruyan los pactos sociales básicos, pactos que lleven a la armonización necesarísima del acomodo interno con la adaptación al mundo globalizado, de la eficiencia con la equidad, de la estabilidad de precios con el desarrollo. Nuestro Estado-nación está en crisis, la revancha de la sociedad civil está en la derrota electoral del PRI y sobre todo en el escepticismo generalizado sobre las capacidades de la ingeniería social en reivindicar los valores colectivos frente al egoísmo individualista de los mercados.

Los ideólogos y panegiristas del cambio neoliberal han exagerado sus beneficios y ocultado o pasado por alto muchos de sus costos. Sin duda, hay ventajas enormes en la apertura universal de los mercados y en la incorporación de los países en desarrollo a la revolución tecnológica y de las comunicaciones del mundo, pero también grandes dificultades y altos precios a pagar en la transición adaptativa. Hasta ahora en México, América Latina y numerosos países periféricos los beneficios han sido magros o se recogerán en el futuro distante, mientras de inmediato han debido hacerse sacrificios sociales enormes. Los ritmos de desarrollo han decaído sustancialmente y se han hecho inestables; el trabajo informal ya abarca a la mitad de la fuerza laboral con serio debilitamiento de las organizaciones obreras; la crisis de la pequeña y mediana industria diezma los cuadros empresariales y las clases medias. En tales condiciones no es extraño que el número de pobres o indigentes crezca, que se concentre la distribución del ingreso, que la desnutrición afecte a demasiados niños, que la criminalidad florezca.

La postmodernidad neoliberal en México ha abierto muchas puertas al progreso y al fortalecimiento de las bases formales de la democracia, pero al ahondar la separación entre Estado y mercado, es decir, al restringir la soberanía externa y la capacidad rectora interna del gobierno en materia económica, quedan canceladas muchas de las posibilidades de acción de la democracia real. Cómo atender las demandas de los excluidos de la modernidad cuando la demanda efectiva en el mercado manda; cómo nivelar la capacidad competitiva de los productores nacionales frente a los conglomerados transnacionales sin reconversión industrial deliberada; cómo revertir los sesgos concentradores del ingreso sin políticas de empleo ni impuestos progresivos; en suma, cómo lograr todo eso con un Estado maniatado en el diseño e instrumentación de las estrategias económicas. La inacción económica del libre cambio a ultranza, puede convertir a la democracia en un rito vacío de alternancias electorales, mientras las demandas sociales siguen insatisfechas y acumulándose.

Quiérase o no, en México el postmodernismo neoliberal nace acompañado por la renuncia al nacionalismo, con la bandera de los derechos humanos y económicos universales, con el abandono de las preocupaciones por el crecimiento y la equidad distributiva, con el abrazo al cosmopolitismo del comercio y a la estabilidad de precios, con la devoción a la democracia formal.

Términos como postmoderno, postindustrial, posteconómico o postideológico simplemente intentan expresar la presencia de profundos cambios en el mundo y sus valores. Hay crisis del Estado-nación y en los valores universales de la ilustración. El relativismo filosófico pone en jaque al concepto de la verdad o la distinción sujeto-objeto; el pluralismo de valores e ideas al *desideratum* republicano de la uniformidad nacional; el cosmopolitismo de los mercados al nacionalismo desarrollista o al socialismo económico; la mercantilización de los bienes culturales al viejo espíritu de la innovación cultural; el individualismo rampante a los nexos aglutinadores de la comunidad.

La jerarquización de valores, principios y metas sociales se ha resquebrajado abriendo el paso a una etapa de transición en que, por algún tiempo, habrá incertidumbre y ambivalencia moral. Será ese el tiempo que tome reconstruir el concepto y la práctica de lo social como alternativa o complemento a la extremosa desigualdad asociada al neoliberalismo contemporáneo y como vía de equilibrar los derechos individuales con los de orden comunitario.

Al parecer, a escala universal dos hitos históricos preocupantes marcan el advenimiento del postmodernismo como reflejo del desencanto con las tesis esperanzadoras de la modernidad occidental y con sus creencias en el poder de la razón y la ciencia para erradicar ignorancia y humanizar a las sociedades. Uno es el apocalipsis de Auschwitz al poner en entredicho el sentido del avance histórico de sociedades supuestamente civilizadas. El otro, que nos toca muy de cerca y que aflora más recientemente en los medios de comunicación —aunque tenga viejas raíces—, guarda

relación con el desamparo de cientos de millones de personas que han de sobrevivir con un dólar o menos al día, cuando el progreso tecnológico podría terminar con el hambre del planeta. Es decir, el postmodernismo económico en lugar de resolver las cuestiones fundamentales que dejó insolutas la marcha anterior, supuestamente progresista de la historia, parece ir en camino de agravarlas. El arte y la ciencia conservan algún poder crítico e innovador aunque embotado por la colonización del mercantilismo. Más y más las obras culturales se convierten en artículos de consumo, en tanto que la ciencia, la tecnología, y la investigación ingenieril se enfocan más a multiplicar o diferenciar los propios artículos de consumo o resolver la planeación globalizada de los consorcios transnacionales con abandono excesivo de los problemas que verdaderamente afectan el bienestar de la humanidad: el hambre, la enfermedad, el abasto de energía limpia, el deterioro ecológico, el rezago del mundo periférico.